

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**



**SALA LABORAL**  
**Acta N°105**

Medellín, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **LICIRA DE JESÚS TORRES RESTREPO** contra **PROTECCIÓN S.A., SURAMERICANA S.A.**, la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** y la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere de forma escrita.

**ANTECEDENTES**

**Pretensiones**

La demandante solicita que se declare la nulidad de los dictámenes de pérdida de capacidad expedidos por **Suramericana S.A.** y las **Juntas de Calificación de Invalidez Regional de Antioquia y Nacional** estableciendo que la fecha de estructuración de la invalidez de la demandante es anterior al año 2015.

En consecuencia, se condene a **Protección S.A.** a reconocer y pagar la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración del estado de invalidez, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio la indexación de las condenas. En subsidio solicitó que se ordenara la devolución de saldos.

**Hechos**

Como fundamento de sus pretensiones expuso que nació el **16 de junio de 1960**, se encuentra afiliada en pensiones a **Protección S.A.**, siendo calificada por la aseguradora **Suramericana S.A.** con una pérdida de capacidad laboral del 54,91% de origen común estructurada desde el día **27 de enero de 2017**.

Frente a este dictamen interpuso los recursos legales siendo resueltos por parte de la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** y la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez**, siendo determinado que su pérdida de capacidad laboral es del 57,21% y se estructuró el día **23 de abril de 2015**.

La patología que padece tiene evidencia desde el año 2005 y en el año 2010 debido a su deterioro sus empleadores decidieron no volver a contratarla.

En toda su vida laboral cotizó un total de 840 semanas de las cuales más de 300 fueron aportadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que le es aplicable el principio de la condición más beneficiosa en los términos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-442 de 2016.

El día **4 de octubre de 2019**, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, sin que a la fecha de presentación de la demanda se le hubiese dado respuesta.

#### **Contestación Protección S.A.**

Esta AFP a través de apoderada dio respuesta a la demanda que son ciertos los hechos, argumentando en su defensa que la aplicación de la condición más beneficiosa no resulta procedente en este caso a la luz del precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desarrollada en las sentencias SL-4650-2017 y SL-2358-2017.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones planteadas como principales y propuso como excepciones: plena validez de los dictámenes emitidos, inexistencia de la obligación, imposibilidad de la obligación, imposibilidad de la aplicación de la condición más beneficiosa, paga y compensación, buena fe y prescripción.

#### **Contestación JRCIA**

Esta entidad a través de apoderada manifestó que es cierto lo referente a las calificaciones de pérdida de capacidad laboral realizada a la demandante, sin que le consten los demás hechos por corresponder a situaciones de terceros.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: validez del dictamen, dictamen ajustado a derecho, inexistencia de obligaciones de reconocimiento y pago de pensión de invalidez, buena fe, inexistencia de fundamentos técnicos y jurídicos para demandar y el estado clínico de la paciente pudo variar.

### **Suramericana S.A.**

Esta sociedad a través de apoderado indicó que son ciertos los hechos referentes a la calificación de pérdida de capacidad laboral de la demandante, sin que le consten las demás situaciones por corresponder a actuaciones de terceros.

Se opuso a la prosperidad de lo pretendido y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, validez de la fecha de estructuración, improcedencia de la aplicación de la condición más beneficiosa, falta de causa para pedir e improcedencia de intereses moratorios.

### **Contestación JNCI**

Finalmente, la **JNCI** a través de apoderado manifestó que es cierto lo referente a la calificación, indicando respecto de los demás hechos que no le constan por ser circunstancias ajenas.

En lo referente a las pretensiones manifestó atenerse a lo demostrado en el proceso, proponiendo como excepciones: legalidad del dictamen, legalidad de la calificación e improcedencia de las pretensiones respecto de la junta.

### **Sentencia de Primera Instancia**

El Juez Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **17 de abril de 2023, absolvió** a las demandadas de las pretensiones presentadas en su contra por encontrar que no se cumplen los presupuestos establecidos por el precedente jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa a prestaciones causadas en vigencia de la Ley 860 de 2003, esto que la invalidez se estructurara en los 3 años anteriores al 26 de julio de 2006.

Esta decisión no la compartió el apoderado de la parte demandante motivo por el cual la recurrió en los siguientes términos generales:

### **Recurso de apelación parte demandante**

El apoderado de la demandante solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia dando aplicación a la sentencia SU-442 de 2016 y SU-556 de 2019, y en ese sentido no es posible limitar el principio de la condición más beneficiosa a que la norma aplicable sea la inmediatamente anterior, un test de procedencia que no unas nuevas condiciones para acceder al derecho.

En ese sentido, destaca que su representada cumple con cada una de las características de procedencia indicadas por la Corte Constitucional, por cuanto: (i) se trata de una persona de especial protección constitucional no solo por su condición de invalidez sino por su vejez y sus padecimientos mentales, (ii) En lo referente a la afectación del mínimo vial, es claro de conformidad con lo explicado por la perito que la demandante tiene afectaciones en su salud desde el año 2008 y desde 2010 dejó de cotizar por un episodio depresivo grave, saliendo del campo laboral lo que afecta sus necesidades básicas, situación que incluso se demuestra con declaración extra juicio presentada por su hijo ante Notario y que hace parte de la prueba aportada en el expediente (iii) en lo que toca con la imposibilidad de cotizar, la misma se deriva de la situación clínica de la demandante, que por su patología no pudo volver a vincularse laboralmente y (iv) Finalmente, en lo que refiere a la diligencia es evidente que la demandante agotó las respectivas reclamaciones.

Por lo anterior solicita que se revoque la decisión de primera instancia y se acceda a la pretensión principal consistente en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y la indexación de las eventuales condenas.

### **Alegatos de conclusión**

Corrido el término de traslado, la apoderada de **Protección S.A.** solicitó que se mantenga en firme la decisión de primera instancia, toda vez que la actora no cumple con las condiciones para acceder a la pensión de invalidez en aplicación de la Ley 860 de 2003, sin que sea posible en su caso acudir a normas vigentes con anterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez.

Por su parte, el apoderado de la parte demandante insistió que la señora **Licira de Jesús Torres Restrepo** cumple con los requisitos para que se aplique la condición más beneficiosa – test de procedencia sentencia SU-442-2016 y SU-556-2019- debiéndose en ese sentido, reconocer la pensión de invalidez toda vez que, cumple con los requisitos para acceder a la misma en los términos establecidos en el Decreto 758 de 1990.

Finalmente, el apoderado de **Seguros de Vida Suramericana S.A.** solicitó que se tenga en cuenta la solidez probatoria que tienen los dictámenes aportados y en ese sentido se mantenga la fecha de estructuración de la invalidez de la

actora.

## CONSIDERACIONES

### Problema Jurídico

El problema jurídico a resolver en esta instancia de conformidad con el recurso interpuesto, será: (i) Determinar si la demandante cumple con los presupuestos establecidos en la sentencia SU-556 de 2019 para en virtud del principio de la condición más beneficiosa realizar un salto normativo entre la Ley 860 de 2003 y el Decreto 758 de 1990.

### Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. La señora **Licira de Jesús Torres Restrepo** nació el **16 de julio de 1960** (01/pág.22).
2. Según historia laboral generada por **Protección S.A.** el día **16 de diciembre de 2016**, la afiliada **Licira de Jesús Torres Restrepo** cuenta con 840,86 semanas de cotización hasta el mes de julio de 2010 (01/págs.58-61).
3. Se observa en resumen de historia pensional para bono, la demandante cotizó al **ISS** antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 un total de 447,43 semanas (01/pág.351).
4. Mediante dictamen efectuado por parte de **Suramericana S.A.** el día 8 de mayo de 2017 se determinó que tiene una pérdida de capacidad laboral del 54,91% de origen común estructurada desde el 27 de enero de 2017 (01/pags.26-29).
5. De la inconformidad frente a este dictamen conoció la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia**, entidad que en dictamen del 26 de octubre de 2017 determinó una pérdida de capacidad del 57,21% estructurada desde el 22 de abril de 2015 (01/pags.40-45).
6. Esta experticia fue apelada, conociendo del recurso la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez**, entidad que en dictamen del 18 de septiembre de 2019, modificó la fecha de estructuración fijándola en el **23 de abril de 2015** (01/págs.46-56).

7. Mediante prueba decretada en el proceso se designó como perito para determinar la fecha de estructuración de la invalidez de la actora a la Facultad de Salud Pública de la U de A, entidad que a través de la perito **Martha Lucía Escobar Pérez** rindió experticia en la que se estableció como fecha de estructuración de la invalidez el **18 de septiembre de 2014** (22).
8. El día **4 de octubre de 2019**, la actora solicitó ante **Protección S.A.** el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez (01/págs.62-63).

Efectuadas las anteriores anotaciones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento.

### **El principio de la Condición más beneficiosa**

Se solicita por parte del apelante que se conceda la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, aplicando a estos efectos el Decreto 758 de 1990 como norma anterior en los términos establecidos en la Corte Constitucional en las sentencias SU-446-2016 y SU-556 de 2019.

En ese sentido para resolver el recurso es necesario recordar que por regla general las contingencias en materia de seguridad social están cobijadas por la ley vigente al momento de su ocurrencia, y solo por vía excepcional y en ciertas circunstancias se puede acudir a una especie de ultractividad de la ley sustancial en el tiempo para estudiar la procedencia del derecho, esta elaboración teórica ha sido denominada por la jurisprudencia como principio de la condición más beneficiosa.

La condición más beneficiosa supone la existencia de un tránsito legislativo que modifique las condiciones particulares para acceder a un derecho del cual ya se cumplía al menos una condición, en el caso de las pensiones de invalidez y sobrevivientes se habla de un derecho eventual de quien cumplía con los requisitos de cotización de la norma derogada y sufre la contingencia en vigencia de la nueva.

En palabras de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el principio de la condición más beneficiosa: *“...entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificar el régimen pensional al cual estuvieran adscritos, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido en sentido riguroso, se ubican en una posición intermedia, habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbi gratia, haber cumplido íntegramente con la*

*densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada para obtener una prestación de índole pensional.” (Sentencia 38674 de 25 de julio de 2012).*

No obstante lo indicado, el máximo órgano de la Justicia Ordinaria Laboral ha establecido una serie de sub-reglas para que se pueda dar aplicación a la condición más beneficiosa: (i) Se debe aplicar la norma inmediatamente anterior (Sentencias SL7275-2015, SL4559-2019 y SL4987-2019), (ii) en el caso de que se reclame la aplicación de la Ley 100 de 1993 la invalidez debe haberse estructurado entre el 28 de diciembre de 2003 y el 28 de diciembre de 2006 (SL-2358-2017 y SL-4650 de 2017) y (iii) deben cumplirse las condiciones establecidas en la Ley 100 de 1993 antes de la entrada en vigencia de la nueva ley y a la fecha de estructuración de la invalidez.

Por su parte la Corte Constitucional al hacer un estudio de este precedente en la sentencia SU-556 de 2019, encontró que el mismo: “...no es *prima facie* manifiestamente inconstitucional ni desconoce el principio de la condición más beneficiosa, pues su aplicación se ha fundamentado en la interpretación general que respecto de tal principio ha hecho la jurisprudencia constitucional”, indicando que no puede ser aplicado a las personas que cumplan con el test de procedencia que fuera establecido en la sentencia SU-005 de 2018.

Esta posición fue reiterada en la sentencia SU-338<sup>a</sup>-2021 en la que el Tribunal Constitucional indicó que la aplicación de la condición más beneficiosa no puede ser irrestricta pues una determinación en tal sentido tendría efectos lesivos frente a la sostenibilidad fiscal del régimen de pensiones, por lo solo de forma excepcional y sobre la base de que se cumplan y prueben de forma necesaria y conjunta las siguientes condiciones puede darse el salto normativo: (i) la situación de vulnerabilidad del peticionario, (ii) la afectación a su mínimo vital, (iii) el por qué no se realizaron las cotizaciones para acceder a la Ley que, en principio, le era aplicable, y (iv) las diligencias que adelantó para solicitar la pensión.

En lo que tiene que ver con el caso bajo estudio, la parte demandante conocedora de estas exigencias dirigió su pretensión a que se reconociera la pensión de invalidez en aplicación condición más beneficiosa, sin embargo, en desarrollo del proceso, no realizó actuaciones probatorias tendientes a demostrar la situación de vulnerabilidad de la actora y la afectación de su mínimo vital, aspecto que solo por vía de sustentación de su recurso y con base en conjeturas derivadas de la historia clínica de la demandante y la existencia de una dependencia económica que no fue tema de discusión en la primera instancia, solicita sean estimadas a efecto de dar por acreditadas condiciones en las que debió orbitar la discusión y demostración probatoria del proceso, sin

que las mismas a juicio de la Sala revistan plena prueba de unos presupuestos cuya carga probatoria conocía desde la radicación de la demanda.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que a juicio de esta Sala no se acreditó el cumplimiento de los presupuestos necesarios para de forma excepcional inaplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de condición más beneficiosa resulta acertada la decisión de primera instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda motivo por el cual se **confirmará**.

### **Costas**

Sin costas en esta instancia.

### **Decisión**

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la providencia de primera instancia proferida por el Juez Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el día **17 de abril de 2023**, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **LICIRA DE JESÚS TORRES RESTREPO** contra **PROTECCIÓN S.A., SURAMERICANA S.A.**, la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** y la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

### **LOS MAGISTRADOS**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**





**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**SECRETARÍA SALA LABORAL**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

<b>Proceso</b>	Ordinario
<b>Demandante</b>	Licira de Jesús Torres Restrepo
<b>Demandado(s)</b>	Protección S.A., Suramericana S.A., La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
<b>Radicado</b>	05001-31-05-019-2020-00059-01
<b>Decisión</b>	Confirma sentencia
<b>Magistrado ponente</b>	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 29 de mayo de 2023 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 29 de mayo de 2023 a las 5:00pm

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
**SECRETARIO**